

Verdadera raíz del problema de Oriente Medio

Bajo pena de guerra mundial

La actualmente caótica situación del Oriente Medio, y las muchas veces superficiales y casi siempre tendenciosas noticias y análisis que sobre la misma facilitan los medios de información, hace sumamente difícil para un espectador imparcial llegar a formarse una idea clara de la verdadera raíz del problema.

El tradicional esquema del pequeño pero fuerte y bien organizado país en lucha contra las desordenadas turbas de un mundo árabe subdesarrollado resultaba comprensible. No menos lo era el juego de alianza con las grandes potencias de cada uno de los dos bloques en pugna. Pero, súbitamente, la drástica intervención del Ejército Regular jordano contra los palestinos hace aparecer la situación como confusa e inexplicable.

La realidad, sin embargo, es muy otra: los recientes sucesos de Amman no han venido sino a aclarar el problema o, al menos, a facilitar la posibilidad de analizarlo con frialdad y sin apasionamientos partidistas.

La Historia obliga

No hace mucho tiempo la clara inteligencia de Toynbee ponía de manifiesto en un artículo publicado en el diario "ABC" la terrible responsabilidad que Inglaterra y los Estados Unidos han de asumir ante los actuales sucesos. Esta responsabilidad deriva directamente de la declaración Balfour de 1917, que creó el Hogar Nacional Palestino, y de la posterior intervención de los Estados Unidos en la constitución del Estado independiente de Israel. La actuación inmediata de éste, expulsando violentamente de sus hogares, ante la indiferencia universal, a las Comunidades árabes asentadas en el territorio, determinó la existencia de estos "palestinos errantes" (valga la sangrienta paradoja) que, con una razón que ningún ser humano podría negarles, plantearon la reivindicación de los bienes y tierras de que habían sido desposeídos.

Con toda exactitud Toynbee, en el artículo citado, afirmaba que la única solución que el problema admitía era, ante la imposibilidad, bajo pena de guerra mundial, de deshacer el Estado de Israel y volver al antiguo "statu quo" la imperiosa necesidad, bajo pena de guerra mundial, de indemnizar de algún modo a los desterrados palestinos y de facilitarles un territorio donde asentarse para así eliminar o, al menos, suavizar el deseo revanchista de los elementos más radicales. Compensación no recibieron los palestinos ni de Israel, máximo obligado, ni de ninguna otra de las potencias responsables de su situación. Únicamente la tolerancia del Monarca hachemita les permitió establecerse en las lindes occidentales de Jordania.

Tercera solución

Las predicciones de Toynbee, desgraciadamente, se han visto confirmadas por la realidad. Pero ésta ha puesto de manifiesto una tercera solución al problema, la única que, en realidad, éste admitía, como intentaremos explicar, en función de nuestras estructuras políticas y sociales.

El ciego revanchismo para unos, la lucha por legítimas

reivindicaciones para otros, radicalizaron la postura de los palestinos, dieron a luz grupos de guerrilleros y llevaron a éstos a cometer actos de violencia (1) como única solución, creencia que no nos es lícito juzgar, pero que nos permite comprender, de atraer hacia su tragedia la atención de un mundo indiferente, cuando no hostil. Y no cabe aquí incluir sólo a Israel, sino a la gran mayoría de los países del mundo árabe. Para ambos grupos la causa palestina, cuyos elementos radicales resultaban igualmente indeseables, fue sólo un argumento de negociación en sus tratos con las dos grandes potencias dispensadoras de armamento, dinero y protección. Como botón de muestra basta recordar que el "llorado" Presidente Nasser no permitió el asentamiento en Egipto de las Comunidades palestinas, que las luchas por el Canal y por los puertos del mar Rojo son puros conflictos de intereses que nada tienen que ver con las reivindicaciones de los palestinos y, por último, que la reciente intervención del Ejército jordano obedecía, en principio, a motivos de seguridad nacional.

La situación, en todo caso, era evidentemente tan provisional y frágil que sólo admitía solución a través de una hábil diplomacia conducida de buena fe entre las grandes potencias, presidida por un deseo de buscar la más adecuada compensación a las justas reivindicaciones palestinas. Ello hubiera quizá podido conseguirse a través del puente de Yasser Arafat, el más moderado de los dirigentes palestinos. Pero los intereses en juego no admitían esta buena fe ni por tanto, esta única vía de solución.

Destruir a los guerrilleros

Sólo restaba, pues, un remedio para aliviar la tensión: intentar hacer desaparecer radicalmente los grupos palestinos o, al menos, reducirlos al silencio. La chispa la hicieron saltar los militares del Ejército Regular jordano, pero la bomba había sido cuidadosamente cargada por todo un mundo ciego e indiferente ante una situación vergonzosa. Por ello, cuando la artillería pesada del Ejército jordano trituraba durante varios días las pobres chabolas donde se apiñaban los treinta y cinco mil habitantes del barrio de Wahadat, y los beduinos perseguían sin tregua, casa por casa, a los fedayines, no era sólo la seguridad de la nación jordana el objetivo perseguido, sino la erradicación de un problema cuya solución pacífica rebasaba las posibilidades de la estructura política de nuestra sociedad.

No es, pues, lícito cargar sobre las espaldas de Hussein el peso de la responsabilidad de lo ocurrido. El Monarca y los generales jordanos no han sido dócil instrumento de la política de las grandes potencias. Es

preciso rendirse a la espantosa evidencia de que desde un punto de vista estrictamente político, la consternación mundial ante los sucesos de Jordania esconde hipócrita un suspiro de alivio siquiera temporal.

Pero el problema, si bien aclarado, dista mucho de estar resuelto. Aunque diezmos, los palestinos saben ya claramente que ningún Estado les brindará nunca poyo alguno, y así su desesperada situación sólo engendrará nuevas violencias que serán tanto más tristes por estar de antemano condenadas al fracaso.

Si alguna lección pudiera desprenderse de los sucesos de Amman sería simplemente la de poner, una vez más, de manifiesto cómo los intereses políticos y económicos en un innoble juego con causas humanas va creando reductos de minorías desesperadas, cuya única posibilidad de diálogo consiste en la violencia.

Y no se crea España tan ajena a este problema, porque de algún modo comparte, como miembro de la Comunidad de Naciones, la responsabilidad de éstos y parecidos hechos.

(1) Sobre este tema no estaría de más recordar que uno de los primeros secuestros aéreos tuvo como finalidad el rapto del dirigente árabe, Ben Bella, y que dicho secuestro no fue obra, precisamente, de incontraídos guerrilleros.

Urge una definición

¿Cuál es nuestra política agraria?

Cuando el ministro de Agricultura Cavestany dijo, varios años antes del Plan de Estabilización, que los campesinos españoles debían convencerse de que la solución de sus problemas no se encontraba en el campo, sino, precisamente, en la emigración, estaba, a la vez, enunciando de forma más bien brutal una verdad parcial y evidenciando más que el fallo de una política, su absoluta inexistencia

Desde 1939, forzada por los imperativos del momento (ideológicos y económicos) había existido en España una política industrial. Hoy, todo el mundo reconoce que tal política contribuyó decisivamente al colapso económico de 1957-59. Pero el reconocimiento de su fracaso implica el de su existencia. Nada de esto puede decirse respecto al sector agrario.

Reformas técnicas

En efecto, en 1939, aunque manteniendo formal y vagamente el mismo objetivo final, se enterró la reforma agraria iniciada durante la II República y se eligió la vía de las "reformas técnicas", que más tarde se concretaron fundamentalmente en la colonización de nuevos regadíos y la concentración parcelaria. Las necesidades financieras suscitadas por la política de regadíos y de colonización y la absoluta voluntariedad de la concentración implicaban evidentemente que el Gobierno estaba decidido a que nada se hiciera sino muy lentamente. Por otra parte, tal elección implicaba también que el problema crucial de las dimensiones óptimas de explotación para cada cultivo y sus condiciones de capitalización pura y simple-

mente se olvidaban, así como también se olvidaban las condiciones que habrían debido establecerse para estimular a la iniciativa privada a buscar mejores rendimientos en una época en que la agricultura era un negocio fácil. Y, a su vez, la lentitud verdaderamente "orgánica" y esperable de las "reformas técnicas" y el olvido de los problemas de dimensión y estímulo produjeron como resultado la reproducción de la situación inicial al cobijo de la mano de obra abundantísima, y por ello muy barata, de la inflación permanente y de la escasez crónica. En definitiva, aquellas "reformas técnicas" ni se aplicaron con la rapidez e intensidad necesarias (esto era imposible por su mismo planteamiento) ni se integraron en un conjunto armónico de medidas más amplias y fundamentales. El resultado fue, en definitiva, el más perfecto "laissez-faire" agrícola. El Servicio Nacional del Trigo había "resuelto" el problema político-agrario más agudo con que se encontraron los sucesivos Gobiernos del país de 1929 a 1936. Las compras de vino y aceite de oliva por la Comisaría de Abastecimientos significaban una solución análoga. Y hasta entonces, ¿para qué otra cosa si los interesados con voz no decían nada, pues estaban satisfechos?



—Yo les aseguro que esta primera piedra que acabamos de colocar no será la única, como tantas otras veces.

La expansión económica que se inicia en 1960, como consecuencia del Plan de Estabilización y de la liberalización económica, y que puede considerarse terminada en 1966, socavó completamente las bases en que se asentaba la agricultura tradicional española. La crisis de los años 1963-65 evidenció que la agricultura española no respondía ni por su estructura, ni por sus producciones, a lo que el país necesitaba, y el intento de detenerla a través de alza de precios agrarios en 1964 estuvo en el origen del intenso movimiento inflacionista que abocó en la devaluación de 1967. España deja de ser "un país eminentemente agrícola" y el sector agrario no sólo no contribuye al desarrollo económico, sino que supone un verdadero lastre para el mismo. Y es entonces, a raíz de la crisis agrícola, al mismo tiempo que la emigración masiva suscita la necesidad aguda de modernización y capitalización en las explotaciones es cuando surgen, ¡por fin!, voces pidiendo una política agraria. Muchos pensaron que la intensidad misma de la crisis conformaba la ocasión ideal para acometer la resolución de los principales problemas: ganadería de ciclo largo, grandes cultivos del secano español, estructura de la propiedad, etc. Pero la respuesta oficial se delineó en 1964 con el intento de soslayar la crisis mediante alzas de precios, y la protección a los cultivos excedentarios (o mediante su creación, caso de la cebada) y se confirmó definitivamente en 1968 mediante la creación del F. O. R. P. A., cuya significación política esencial es

de conceder a los intereses del sector un instrumento de presión y reivindicación potente, otorgándoles una amplia representación y la posibilidad de colaborar directamente en la elaboración de medidas a tomar en cada cultivo y en cada momento.

Recursos

Y sobre esta pequeña historia pueden comprenderse que nuestra política agraria sigue sin definirse. Los objetivos que se pregonan no pueden confundir a nadie ni disimular su verdadera naturaleza, pues, en efecto, "la nivelación de la balanza comercial agraria" (nuevo nombre que se da a la autarquía agraria), "la necesidad de acercarnos a la C. E. E.", o "la igualdad de la renta de los agricultores con la de otras actividades (nuevos nombres que se dan a las soluciones a corto plazo incrementando precios) son lemas de pancarta o recursos oratorios, pero no pueden considerarse como la enunciación de objetivos económicos que tengan algún significado racional, único y discernible.

La intención de la instrumentación Sindicatos - Administración económica de esa falta de política agraria es muy clara (respecto al mundo de los gobernantes y respecto al mundo de los gobernados), y algún día será necesario volver sobre ella. Pero a plazo medio y largo sus consecuencias sobre el desarrollo económico del país no podrán ser sino nefastas.

"Juan Ruiz"